



Conferència del vicepresident Aragonès a l'esmorzar informatiu d'Europa Press

Madrid, 24 d'octubre del 2019

Buenos días,

Quiero empezar, como no puede ser de otro modo, con un agradecimiento a la oportunidad que me ofrece Europa Press de pronunciar esta conferencia en un momento de extrema complejidad en las relaciones entre Catalunya y el Estado.

Antes de empezar, permítanme que haga una referencia a los efectos de las fuertes tormentas acaecidas en Catalunya esta semana, que han comportado la muerte de una persona y la desaparición de otras cinco, además de numerosos daños materiales en vías de comunicación, propiedades públicas y privadas. Mi deseo y mi compromiso es trabajar con todo el Govern de la Generalitat en la pronta recuperación de los municipios afectados y acompañar a las familias de las personas fallecidas o desaparecidas.

Como les decía, y retomando la actualidad política más inmediata, son momentos difíciles para todos, y es evidente que la mayoría de la ciudadanía —con independencia de sus ideas políticas—, en Catalunya y en el Estado, vive con gran preocupación la incapacidad hasta el momento de encontrar una solución acordada a los problemas que tenemos encima de la mesa.

Por esta razón, creo que es imprescindible hablar, como tengo ocasión de hacer hoy, planteando mi punto de vista, como Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y como Coordinador Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya.

Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los que representamos a los ciudadanos, es hacer política. **Es la hora de la política. Del diálogo y la negociación para culminar en un acuerdo.**

Por difícil que pueda parecer hoy, hay que dar los primeros pasos. El bloqueo permanente no es bueno para Catalunya ni es bueno para el resto del Estado. Se trata, pues, de encontrar una solución política a un conflicto que no es de desorden público ni de convivencia entre catalanes, sino que es político. Abrir vías para poder hacer política. Porque creo, sinceramente, que es nuestra obligación si queremos estar a la altura de este momento histórico y resolver un conflicto que corre el riesgo de enquistarse, de cronificarse —en perjuicio de todos— por muchas generaciones.

Si no hablamos ahora, ¿cuándo? Si no lo hacemos los máximos representantes políticos de Catalunya y el Estado, ¿quiénes? Es ahora, es aquí, nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad.

Tengo el tiempo limitado, y no es mi intención convertir este encuentro en una clase de historia, ni centrarme en una constatación del pasado reciente. Pero a nadie se le escapa que el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado no es nuevo.



Son muchas las generaciones de catalanes que han intentado transformar el Estado español con la voluntad de conseguir un reconocimiento de la realidad nacional catalana satisfactorio en cada momento histórico, y trabajar a la vez para un Estado que responda a las necesidades sociales y económicas de Cataluña. No vamos a resolver de la noche a la mañana lo que es un problema de raíz histórica, centenario, pero esta constatación no debe hacernos desistir de construir caminos de solución. En los últimos años, todos los presidentes de la Generalitat de la Catalunya han alertado de forma reiterada sobre la necesidad de redefinir la relación entre Cataluña y el Estado español.

A día de hoy, queda lejos la propuesta del president Pasqual Maragall de articular un acuerdo de interdependencia a través de un nuevo Estatut, o las alertas del president Montilla sobre cómo la frustración ciudadana hacia las expectativas del nuevo Estatut —sumada a los recursos del PP y del Defensor del Pueblo— podría derivar hacia una «desafección emocional de Cataluña» hacia el Estado español, y terminar con un «Adéu Espanya». Y lejos queda, también, la propuesta de Pacto Fiscal del president Artur Mas de 2012 —que se formuló en pleno despertar del independentismo, después de la sentencia contra el Estatut— como último intento del catalanismo de transformar el Estado o de cambiar el encaje de Cataluña en España antes de optar por la construcción de un Estado propio.

Puede gustar más o puede gustar menos, pero la incapacidad de comprender lo que pide Cataluña es una realidad tangible: no ha habido una contrapropuesta articulada desde las instituciones del Estado hacia Cataluña. Todas las propuestas que han salido de Cataluña hacia el Estado en las últimas décadas —gusten más o gusten menos— han obtenido la misma respuesta. Un «no» rotundo que hace que una parte importante de la ciudadanía de Cataluña ya no crea en un encaje en el Estado y opte por la independencia. Pero un «no», reitero, que nunca ha ido acompañado de una alternativa solvente, articulada y viable.

Constantemente se menciona el hecho de que Catalunya fue uno de los territorios del Estado en el que grado de apoyo a la Constitución Española en el referéndum de 1978 fue de los más altos. Pero, cuando se menciona esta cuestión, se olvida de que aquel grado de apoyo estaba directamente relacionado con las posibilidades de desarrollo del autogobierno de Catalunya que amplias capas del catalanismo político percibían posible en aquel acuerdo.

La realidad ha sido que en los últimos años la doctrina del Tribunal Constitucional se ha inclinado claramente hacia una visión centralizadora, de cierre del desarrollo del autogobierno -que tiene en su punto culminante la sentencia sobre el Estatut de Catalunya- y, más claramente en los últimos cinco años, hacia una limitación de las materias en las que el Parlament de Catalunya puede posicionarse políticamente o no.

A la vez, la arquitectura relacionada con la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 ha comportado el fin de la autonomía financiera. La centralización de las decisiones más importantes en materia presupuestaria, la perversión de la aplicación del sistema de financiación autonómica (como se ha demostrado en el asunto de las entregas a



cuenta estos últimos meses) es la otra cara que certifica que el estado de las autonomías políticamente ha muerto, ha llegado a su fin.

Ante esta situación de “cierre de sistema”, **la opinión pública española debe entender que, para millones de catalanes, el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico.**

En este contexto se debe interpretar la propuesta de referéndum acordado que el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y el conseller Romeva expusieron no muy lejos de este auditorio en la primavera de 2017. Porque la respuesta al independentismo que representa a más de 2 millones de catalanes no puede ser siempre un «no». Y mucho menos si este «no» va acompañado de la aplicación del Código Penal hacia un proyecto político de impoluta tradición democrática e inquestionable convicción pacífica.

Muchas veces se ha querido asociar el independentismo a la idea de nacionalismo excluyente, caricaturizando las reclamaciones de una parte de la ciudadanía de Catalunya como algo arcaico, contrario a los tiempos que vivimos, como una suerte de refugio tribal o romántico. Lejos de esta caracterización simplista y contraria a la realidad, el independentismo catalán responde a un planteamiento de valores republicanos, de raíz cívica, que encuentra su razón de ser en la idea de ciudadanía y en la voluntad de compartir un proyecto político común, sin tener en cuenta el origen familiar, la lengua o el estrato social.

La voluntad compartida de un conjunto de ciudadanos libres que queremos mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra nación.

Un estado independiente que no va en contra de nadie y en el cual todo el mundo es bienvenido. Una República libre para garantizar la cohesión social, el estado del bienestar y la prosperidad de toda la ciudadanía. En resumen: una comunidad política que se reconoce a sí misma como tal, que quiere decidir y administrar su futuro en libertad.

Este es un proyecto político abierto al mundo, de profunda convicción europeísta, espacio de soberanía compartida. Porque Catalunya quiere ser el primer estado que nace compartiendo soberanía nacional como lo hacen el resto de estados de la UE. No queremos reproducir el modelo de los viejos estados nación, renuentes a ceder soberanía. Somos parte indisoluble del proyecto europeo, y desde Europa queremos ser solidarios con el conjunto de estados y pueblos de la Unión. Y poder contribuir así a transformar el proyecto europeo. Porque no podemos tolerar que se quede de brazos cruzados, por ejemplo, ante el drama que vivimos cada día en aguas del Mediterráneo, lo que es un genocidio en pleno siglo XXI.

Y tenemos que avanzar hacia la Europa de los ciudadanos, con una plena integración que no significa otra cosa que una federación bien entendida. Una Europa que



apuesta por la cohesión social y la prosperidad compartida más allá de la integración económica y monetaria.

Esta es la fuerza del independentismo mayoritario, su pragmatismo, en el buen sentido de la palabra. Su voluntad de progresar y avanzar a través de una adscripción nacional moderna, que no vive de reminiscencias históricas, sino que su fortaleza es la construcción de un proyecto de futuro en común. Si no fuera así, no se entendería que el independentismo eclosionara precisamente en el momento de máxima diversidad de orígenes y pluralidad de lenguas y culturas propias de la ciudadanía de Cataluña.

Y esto es así porque el independentismo no pide adhesión por nacimiento, sino voluntad de participar de un proyecto colectivo que tiene como principal y noble objetivo construir una sociedad mejor. Los republicanos no miramos el carné de procedencia, ofrecemos un proyecto de futuro.

En Catalunya se hablan más de 300 lenguas. Somos un país con el extraordinario bagaje cultural de orígenes diversos. La Catalunya mestiza hija de generaciones llegadas de todo el mundo. Hoy, la independencia de Catalunya la defiende en este foro un nieto de andaluces, como tantos otros como yo que queremos que Catalunya decida su futuro, y que hablamos catalán y castellano con nuestros amigos y familiares, que nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes y absolutamente comprometidos con nuestro futuro.

Y defendemos este proyecto en una Catalunya con muchos retos, la mayoría de ellos también compartidos por otros territorios del Estado y de Europa. Una globalización económica que está transformando nuestro sistema productivo y las estructuras sociales con la digitalización y la robotización diseñando nuevas oportunidades y nuevas desigualdades, una crisis climática sin precedentes y un reto migratorio extraordinario.

En este contexto, podría desarrollar ampliamente la evolución positiva de la economía catalana, pero me centraré solo en unos datos para ilustrar que, pese a la magnitud de los retos, la sociedad catalana y las instituciones que la representan, con la Generalitat a la cabeza, están a la altura de estos retos:

- En los últimos años, especialmente desde el inicio de la recuperación a finales de 2013, el PIB ha crecido por encima de la media estatal y doblando tasas de la eurozona.
- La tasa de paro se sitúa en el 11,5 por ciento, por debajo de la media estatal, pero aún así demasiado alta para el modelo de país que queremos.
- Las exportaciones han batido año tras año récords en términos absolutos. La apertura comercial y económica de Catalunya es hoy mucho mayor que hace diez años. Pese a la coyuntura de desaceleración económica mundial, las exportaciones siguen creciendo. El último dato así lo corrobora: crecimiento del 5,3% interanual en el segundo trimestre de este año, y 8% en julio.
- En el último año, todos los sectores productivos (a excepción de la agricultura) están haciendo una contribución positiva al crecimiento económico. Tenemos



una economía mucho más diversificada y equilibrada que antes de la gran recesión.

- Y la mejora de las finanzas públicas de la Generalitat es notable: cuando Oriol Junqueras fue nombrado vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, el déficit de la Generalitat era del 1,9% del PIB, el último ejercicio es de 0,44%, que supone una reducción de 3.300 millones de euros. Pese a los instrumentos insuficientes de los que disponemos.

Son solo algunos datos. He querido centrar esta intervención en la grave situación política en la que nos encontramos, pero estoy a su disposición por si quieren debatir todas las cuestiones relacionadas con la política económica y social en el turno de preguntas.

Pero estos datos no pueden llevarnos a un conformismo irresponsable. Los elementos de inestabilidad internacional, como un Brexit sin acuerdo, la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos o los primeros indicios de una nueva desaceleración de la economía global son nuevos retos a los que tendremos que hacer frente, que se suman al carácter cíclico de la economía capitalista, especialmente en un contexto de globalización económica y financiera

Ciertamente, estos retos se pueden afrontar mucho mejor en un contexto de estabilidad política que permita a la vez encauzar de forma ordenada, democrática y dialogada el conflicto político entre Catalunya y las instituciones del Estado.

No es momento del regate en corto ni del laboratorio electoral permanente. Tratamos de poner soluciones encima de la mesa, de buscar un desbloqueo porque de lo que estamos seguros es que el bloqueo no beneficiará a nadie. Pero enfrente nos encontramos un gobierno de tacticismo permanente. Y ahora es el momento de poner las luces largas. Quien se quede en el regate en corto será un agente activo del bloqueo y de la no solución al problema.

Es increíble que un partido dicho socialdemócrata decline formar un gobierno de progreso y ampliamente legitimado para afrontar con valentía los principales retos del Estado español —empezando por el conflicto con Cataluña— por miedo a la derecha y a la ultraderecha. Desde el miedo no se gobierna. El miedo solo se traduce en inacción.

Se gobierna desde el coraje de afrontar los conflictos para buscar soluciones, saliendo del ámbito de comodidad y no atrincherado en un parapeto para evitar los ataques de una derecha que necesita el conflicto para cohesionar a su electorado. Esto es lo que diferencia a un presidente de un estadista. Y sin ninguna duda, la complejidad del momento, exige el concurso de estadistas, no de candidatos, no de propaganda.

Pedro Sánchez forjó su liderazgo en el «No es no» y paradójicamente puede acabar protagonizando la primera gran coalición del Estado español. Con el jefe de la oposición, Pablo Casado, quizás comparten parte de un viaje de cariz más



conservador que no progresista, y sin duda, un acuerdo de estas características significaría una gran tranquilidad para el statu quo inmediato del Estado.

Un acuerdo PSOE-PP sería una pésima noticia para todos aquellos que estamos empeñados en encontrar una solución democrática, dialogada y pacífica al conflicto entre Cataluña y el Estado español.

Porque un gobierno del PSOE, con el concurso directo o indirecto del Partido Popular de Casado y Aznar, solamente puede significar la perpetuación del conflicto y la sistematización de la represión hacia ciertos proyectos políticos que, legítimamente, aspiramos a lo mejor para nuestra sociedad.

Esto es lo que querían —y quieren— Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Mejorar la vida de la población de Cataluña. Una aspiración noble y legítima, que además solo estamos dispuestos a conseguir por vías estrictamente democráticas.

Y eso fue el 1 de octubre. Una victoria de la democracia más que del independentismo. Y el ejercicio de la democracia nunca puede ser considerado un delito. **Querer solucionar los conflictos votando no es un delito ni organizar un referéndum está tipificado como tal en el Código Penal. Por este motivo, estamos convencidos de que estamos delante de una sentencia que solo puede ser interpretada como injusta.** Porque la única sentencia justa hubiera sido la absolución.

Es una sentencia injusta. Y condenar a un siglo de prisión a 7 hombres y 2 mujeres de paz solo se puede calificar como una sentencia dura. Pero nunca se podrá derrotar al independentismo a golpe de código penal.

Esta sentencia conlleva una relectura restrictiva de cómo habíamos venido interpretando derechos civiles y políticos que creíamos consolidados. Porque con la sentencia, cualquier acto de desobediencia, cualquier acción de protesta, puede ser castigado con 13 años de cárcel por delito de sedición.

Hay una nueva jurisprudencia que hoy se utiliza como instrumento de persecución del independentismo, pero mañana se puede usar contra los sindicatos, los pensionistas, la PAH, Greenpeace, Femen o cualquier movimiento cívico, social o político con voluntad de transformar el orden establecido.

A día de hoy, los principales responsables del 15-M podrían estar cumpliendo condena por sedición en Estremera. Y todo esto en un contexto en el cual la democracia española ha digerido mejor la homologación de VOX como actor político que la fuerza democrática, cívica y pacífica del independentismo.

En este sentido, no debe extrañar que las movilizaciones de denuncia de la sentencia sean un punto de encuentro de demócratas de distintas ideologías, sean o no sean independentistas. Porque la ciudadanía lo interpreta como una laminación de sus derechos democráticos, y los derechos democráticos deberían ser el principal bien



constitutivo de la condición de ciudadanía en una sociedad avanzada de cualquier estado de la Unión Europea.

Seguramente por eso estos días hemos recibido muestras de solidaridad, que agradecemos profundamente. Empezaba mi exposición con la constatación de la incapacidad de comprender lo que pasa en Catalunya. Y **la sentencia no deja de ser una muestra más de esta realidad. Con ella se expulsa a casi 2.300.000 ciudadanos que votamos el 1 de Octubre y solamente se agrava la profunda y creciente fractura entre Catalunya y el Estado español. Nuestras convicciones son claras y firmes. Como dice Oriol Junqueras: “vamos a persistir, persistir y persistir”.**

Sin embargo, hay quien quiere reducir la realidad a un conflicto entre catalanes, empezando por el propio presidente Pedro Sánchez, quien ha llegado a negar la máxima, ampliamente aceptada por el conjunto del catalanismo —con independencia de su adscripción ideológica— de que Cataluña es un solo pueblo, una sola sociedad.

Un lema, por cierto, del Partido Socialista Unificado de Catalunya, organización líder de la resistencia antifranquista. “Catalunya, un sol poble”.

Los catalanes —desde proyectos distintos— hemos tenido la capacidad de llegar a grandes acuerdos entre nosotros, como demuestra la aprobación del Estatut en el Parlament de Catalunya. Y fue el Estado quien no aceptó el acuerdo. No puede haber ninguna duda. El conflicto es entre Cataluña —con toda su diversidad y pluralidad— y el Estado. Y el fracaso del Estatut así lo evidencia.

No sé si es difícil de entender, pero nuestra voluntad es explicarlo las veces que sea necesario. Porque hoy hay un consenso amplio en el seno del catalanismo de que el conflicto se debe afrontar desde un diálogo sincero, que abra la puerta a una negociación con voluntad real de llegar a acuerdos. El movimiento se demuestra andando y el diálogo, hablando.

Desde nuestras respectivas convicciones políticas, pero con absoluta voluntad de dar una respuesta satisfactoria para el conjunto de la ciudadanía. Y si la voluntad mayoritaria de la población de Cataluña es actuar a través del diálogo, es evidente que en ningún momento hemos dejado de ser un solo pueblo.

He sido claro, creo, sobre cuál es nuestra posición, nuestras convicciones, nuestro proyecto político. Pero, a la vez, quiero ser muy claro que estamos dispuestos, que queremos, que nos comprometemos, a abrir un diálogo sin condiciones previas.

Propongo una mesa de diálogo para una solución política y democrática estructurada en los siguientes puntos:

1. Reconocimiento de las partes: Si Sánchez quiere solucionar el conflicto, no puede seguir ignorando a los partidos independentistas catalanes. Somos nosotros quien gobierna Cataluña. Y son los independentistas, con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián a la cabeza, quienes ganaron las elecciones al



Congresos de Diputados en Cataluña. Entiendo que no le guste, pero esta es la realidad. No tiene ningún sentido que el presidente en funciones aborde las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo con todos los actores políticos menos con el gobierno de la Generalitat de Catalunya y los partidos independentistas. Dialogar no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza de las propias convicciones. Libertad para proponer soluciones políticas: no se puede negar ninguna propuesta de entrada, ningún veto. Yo no estoy de acuerdo en la defensa a ultranza de la unidad de España pero reconozco que es una posición legítima. De la misma forma que defendiendo la legitimidad de defender un referéndum de autodeterminación de Catalunya. Constantado esta distancia, empecemos a trabajar, a dialogar, a comprender la posición de la otra parte.

2. Amplias mayorías y validación democrática: el resultado de esta negociación y diálogo debe suscitar el apoyo de una amplia mayoría de la sociedad catalana, y articular un sistema de validación democrática. Es decir, una votación.
3. Seguridad y garantías: debemos dotar de seguridad jurídica los posibles acuerdos que nazcan de este proceso de negociación, y a la vez establecer mecanismos de garantía de cumplimiento.

En conclusión: un espacio para empezar a hablar, sin apriorismos ni condiciones previas, donde todas las partes puedan exponer, des de la sinceridad y con toda libertad su opinión, su punto de vista, sus demandas y sus reivindicaciones. La declaración conjunta de Pedralbes de diciembre pasado es, en mi opinión, un buen punto de partida que creo recuperable y que no debería caer en saco roto.

Y nosotros también queremos hablar de amnistía, del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Catalunya.

No engaño a nadie. Soy independentista desde que tengo consciencia política. Pero por encima de todo soy demócrata. Y ahora es el momento de que se decida por parte del Estado si se es más demócrata o solamente defensor de la unidad de España. Nosotros le esperamos a la mesa de diálogo para hablar. Partiendo de la discrepancia.

Este es un deber y una obligación de todo político y estoy convencido de que todos estaremos a la altura de este momento histórico. Esperemos que más pronto que tarde entiendan que **es urgente que alguien se siente en esa silla vacía que explicaba Oriol Junqueras en su declaración en el Tribunal Supremo.**

En definitiva: sentémonos y hablemos. Es lo que pide la gente en Catalunya, es lo que piden las calles de Catalunya, es lo que pide el sentido común, es lo que pide la responsabilidad. No hay otro camino.

Muchas gracias.